

WALDEN BELLO*

LA CRISIS GLOBAL DE LA LEGITIMIDAD DE LA DEMOCRACIA LIBERAL

EN MI LIBRO *Dilemas de la dominación* identifico tres dimensiones de la crisis de la democracia liberal. La primera es la crisis de sobreextensión, o la brecha creciente entre el objetivo imperial y el alcance imperial, siendo el ejemplo más notable la presencia empantanada de Estados Unidos en Irak. Esta situación ha llevado a una erosión de su posición estratégica global y ha hecho que la idea del uso de la fuerza militar americana para disciplinar a gobiernos y fuerzas recalcitrantes a lo largo y ancho del mundo sea menos creíble de lo que era tres años atrás. El brillante desafío de Hugo Chávez al poder americano no sería posible sin la actuación de la resistencia iraquí atacando a las fuerzas de intervención de Estados Unidos en una guerra sin fin. La segunda es la crisis de sobreproducción, sobreacumulación, o sobrecapacidad. Dicha crisis se refiere al crecimiento de la brecha entre la enorme capacidad productiva del sistema capitalista global y la limitada demanda global de los bienes producidos por este sistema. Los resultados han sido, a través del tiempo, dramáticas caídas en las tasas de crecimiento de las economías centrales, estancamiento y crisis de rentabilidad. Los

* Doctor en Sociología de la Universidad de Princeton. Profesor de Sociología y Administración Pública en la Universidad de las Filipinas. Director ejecutivo de *Focus on the Global South*.

esfuerzos del capital global para recuperar la rentabilidad, intensificando la explotación laboral en el Norte o desplazándose para tomar ventaja de costos más bajos en otros lugares, no hicieron más que exacerbar la crisis. Por un lado, las políticas neoliberales en el Norte y los ajustes estructurales en el Sur han minado la demanda global. Por otra parte, la exportación de capitales ha creado una capacidad industrial masiva en China y otros países seleccionados. La receta para exacerbar la crisis de rentabilidad está dada por la nueva capacidad productiva y por una demanda global estancada o en declinación.

Un indicador de la profundización de la crisis de rentabilidad es que la competencia ha reemplazado a la cooperación como el aspecto dominante de las relaciones entre las élites capitalistas. Desde el proyecto de la globalización, que más o menos unió a la clase capitalista global de la era Clinton hemos entrado, a partir de la era Bush, en un periodo de intensa competencia capitalista nacional o regional. La administración Bush adhiere al proyecto capitalista en tanto éste sea el de la gestión de la globalización, que asegure que los intereses corporativos de Estados Unidos no sean perjudicados, sino que sean los principales beneficiarios del proceso. La protección de los intereses corporativos de Estados Unidos y el libre comercio para el resto del mundo –éste es el dictado operacional de Washington, el cual ahora está siendo proyectado en la negativa categórica estadounidense a soportar, debido a las reglas del NAFTA, las importaciones canadienses de madera-. Dada esta postura proteccionista por parte de Washington, no es sorprendente que las negociaciones de la OMC en vistas a la Sexta Reunión Ministerial de la ronda de Hong Kong corran el riesgo de fracasar.

La tercera dimensión de la crisis que identifiqué es la crisis de legitimidad de la hegemonía estadounidense. Considero que esta crisis es tan seria como las otras dos, en la medida en que, como un admirador de Gramsci, creo que la legitimidad, más que la fuerza o el mercado, es la base de un sistema de relaciones sociales. Una de las dimensiones de la crisis de legitimidad es la crisis del sistema multilateral de gobernabilidad económica global, debido a que Estados Unidos ya no espera actuar como un *primus inter pares*, o el primero entre los iguales en la OMC, el Banco Mundial y el FMI y está deseando conseguir unilateralmente sus intereses a través de estos mecanismos, debilitando seriamente la credibilidad, legitimidad y funcionamiento de los mismos como instituciones globales. Otra dimensión de esta crisis de legitimidad es la crisis de la democracia lockeana, el modelo de gobierno democrático que Estados Unidos ha promovido, tanto en el Norte como en el Sur, como el sistema de autogobierno. Desearía enfocar el resto de mi exposición en esta dimensión de la crisis de hegemonía.

La democracia lockeana actualmente se encuentra en crisis en todo el mundo. Esto es irónico, dado que tan sólo una década atrás se suponía que la democracia liberal estilo americano barrería con todo lo que encontrara a su paso. Cuán diferente al fin de la historia de Fukuyama es el sentido de la crisis de hoy, la cual el pensador Richard Rorty captura bastante bien en su comentario:

[...] En el peor escenario, los historiadores tendrán que explicar algún día por qué la época dorada de la democracia occidental, como la era de los Antoninos, solamente duró cerca de cien años (Rorty, 2004: 10).

Permítanme comenzar con los Estados Unidos. Allí, la “democracia” –democracia liberal– ha sido cuestionada por el masivo boicoteo de las elecciones por parte de corporaciones financieras, que han corrompido tanto al partido Republicano como al Demócrata, y por el sistemático menoscabo del derecho a voto a la gente pobre simbolizada por las elecciones de Florida en el año 2000 y las de Ohio en 2004.

El gobierno corporativo ha alcanzado su apogeo con George W. Bush haciendo propuestas a la industria estadounidense para sabotear el Protocolo de Kyoto; premiando a las compañías aliadas de su vicepresidente, como Halliburton, con contratos sin procesos licitatorios; yendo a la guerra por sus amigos petroleros y creando un paradisíaco mercado libre para las corporaciones de Estados Unidos en Irak.

Allí, el *establishment* militar se ha vuelto tan incontrolable para sus superiores civiles nominales que uno no puede más que acordar con William Pfaff cuando escribe:

Los Estados Unidos no son todavía la Prusia del siglo XVIII, cuando los militares eran los propietarios del estado, [pero] la amenaza es más seria de lo que la mayoría de los americanos creen (Pfaff, 2001).

Allí, lo “liberal” en la democracia liberal ha sido subvertido por el Acta Patriótica que elimina muchas de las pocas barreras que habían quedado entre el individuo y el total monitoreo y control por parte del Gran Hermano. El Acta Patriótica es muy bien descripta por la profesora de Harvard Elaine Scarry como “una licencia gigante para buscar y medir aquello que viola la Cuarta Enmienda”.

Lo que es claro es que aquella que se autoproclama como la primera democracia moderna ha dejado de ser un modelo para el resto del mundo. Sobre lo que quisiera insistir un poco más es en el estado de la democracia en el mundo en desarrollo. Sólo una década atrás se suponía que nos encontrábamos en el medio de lo que Samuel Huntington denominó la “tercera ola” de democratización, en tanto país

tras país en América Latina, Asia y África abandonaban los gobiernos dictatoriales y adoptaban variantes del modelo democrático anglo-americano. Hoy la pregunta recurrente es: ¿estamos atravesando el reverso de esa ola? Permítanme tomar como ejemplo de la fortuna cambiante de la democracia la situación de mi país, Filipinas.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON EL PODER DEL PUEBLO?

El “poder del pueblo” solía ser un sinónimo de las Filipinas. En febrero de 1986 los filipinos capturaron la imaginación del mundo cuando colmaron las calles para apoyar un levantamiento militar y desplazar al poderoso Ferdinand Marcos. Quince años después, en enero de 2001, nuevamente se volcaron a las calles para derrocar al presidente Joseph Estrada, quien era sospechoso de recibir cientos de millones de pesos de actividades de juego ilegales. Sin embargo, hoy están ausentes mientras otro presidente se halla acusado esta vez de “robarse” las elecciones.

Intercepciones de conversaciones telefónicas entre la presidenta Gloria Macapagal Arroyo y un comisionado electoral durante las elecciones de mayo de 2004 mostraron el intento de la presidenta de influir en el resultado de las votaciones. Ante la imposibilidad de negar que era su voz la que se escuchaba en las cintas interceptadas, Arroyo se disculpó públicamente por haber tenido un “lapsus en su sano juicio”. En vez de aplacar la situación, la admisión desencadenó extensas demandas para que renuncie.

A comienzos de setiembre de 2005, casi tres meses después de que estallara el escándalo, Arroyo bloqueó un intento para someterla a juicio político, aferrándose al poder a pesar de que una reciente encuesta la daba como la presidenta con más baja popularidad entre los cinco últimos presidentes del país. Tales números, sin embargo, no se trasladaron a las calles. La mayor manifestación de fuerzas anti-Arroyo alcanzó, como mucho, las 40 mil personas. En contraste, cientos de miles habían colmado la principal calle que atraviesa Manila, popularmente conocida como “EDSA”, durante días en 1986 y 2001.

¿Qué sucedió? Se preguntaban los veteranos activistas en las calles de Manila. ¿Por qué la gente ya no protestaba contra un evidente caso de fraude electoral cometido por una presidenta que ya era extensamente impopular debido a su ineptitud, su falta de liderazgo y sobre la que recaían creíbles acusaciones de corrupción incluso antes de que las escuchas telefónicas salieran a la luz?

La verdad es que si bien a la gente no le agrada Arroyo, también está muy desilusionada con el sistema político, que es conocido como el “estado EDSA”. Conversaciones con ciudadanos de clases media y baja inevitablemente brindan la misma respuesta a por qué no se manifestaron: “Bueno, quienquiera que la reemplace seguramente será tan mala

como ella, sino peor". Intrigado por el descubrimiento de que sólo un puñado de estudiantes no graduados de mi clase de sociología política en la Universidad de Filipinas, el tradicional corazón del activismo, había asistido a las manifestaciones, les presenté la siguiente pregunta, "¿Vale la pena salvar a la democracia?" Dos tercios contestó que no.

Más que salir a las calles, gran cantidad de gente está volando hacia Europa, los Estados Unidos y Medio Oriente. Cerca del 10% de la fuerza de trabajo filipina se encuentra hoy en día trabajando en el exterior y uno de cada cuatro filipinos desea emigrar. Se estima que actualmente por lo menos el 30% de los hogares filipinos subsiste gracias a los 8 millones de remesas enviadas por los expatriados.

El creciente cinismo sobre la democracia es entendible, especialmente cuando los filipinos comparan su suerte con la de los chinos y los vietnamitas. Algunos señalan con resentimiento que mientras el autoritario Vietnam redujo la proporción de la población que vive en la extrema pobreza del 51% que representaban en el 2001 al 10% en el 2003, en el mismo periodo Filipinas sólo pudo bajar este porcentaje del 20 al 14%. Censuran el hecho de que el coeficiente de Gini, la medida más confiable para medir la desigualdad, de Filipinas es del 0,46, el peor en el Sudeste Asiático.

LA CAPTURA DEL PROCESO DEMOCRÁTICO POR PARTE DE LA ELITE

Creo que una razón clave para entender la crisis de la democracia en el mundo en desarrollo es que el tipo de democracia electoral que favorece occidente ha sido extraordinariamente vulnerable a ser sabotead por las élites. El sistema democrático reestablecido en Filipinas luego de la caída de la dictadura de Marcos en 1986 ilustra el problema. Es un sistema que promueve la máxima competencia entre facciones de la élite, permitiéndoles cerrar filas contra cualquier cambio en la estructura social y económica.

El sistema filipino es democrático en el estrecho sentido de hacer de las elecciones el árbitro de la sucesión política. En el principio de "un hombre/una mujer, un voto" hay igualdad formal. No obstante, esta igualdad formal no puede más que ser subvertida por estar inmersa en un sistema económico y social caracterizado por grandes disparidades de riqueza e ingresos.

Tal como el sistema político americano sobre el cual está basado, la genialidad del sistema democrático filipino, desde la perspectiva de la élite, radica en el modo en que conduce a las elecciones con fines socialmente conservadores (Bello, 2003: 80-91). Competir por un cargo en cualquier nivel del gobierno es prohibitivamente caro, por lo cual, sólo los ricos o aquellos respaldados por los ricos pueden usualmente

competir en las elecciones. De este modo, las masas eligen a sus representantes, pero dentro de un limitado grupo de personas, que pueden pertenecer a diferentes facciones “dentro” o “fuera” del poder, pero que no son diferentes en términos de sus programas políticos. Desde la perspectiva de la élite, la belleza del sistema reside en que el pueblo está comprometido periódicamente a realizar el ejercicio de elegir entre diferentes miembros de la élite, de modo tal que las elecciones hacen a los votantes activos participantes en la legitimación del statu quo social y económico. De aquí ha surgido la gran paradoja filipina: un extremadamente vigoroso juego de política electoral que se desarrolla sobre una estructura de clases que es la más inmóvil en Asia.

Reconociendo las diferencias culturales e institucionales, puede decirse que las dinámicas de las políticas democráticas en países como Brasil, Argentina, México, Ecuador y Tailandia, son similares a las de Filipinas. La democracia de las élites es un término que algunos han utilizado para describir este sistema. Poliarquía es otro. Sin embargo, la captura del proceso democrático por parte de la élite, es, desde mi punto de vista, sólo un factor que subvierte el despliegue de las nuevas democracias que emergieron en los años ochenta. Otro desarrollo fue igualmente crítico: sus promesas económicas fueron socavadas por las demandas de los actores externos.

LA SUBVERSIÓN EXTERNA DE LA DEMOCRACIA

Volvamos a la coyuntura histórica de principios de la década del ochenta. Las dictaduras militares estaban colapsando no sólo por las resistencias internas, sino también porque actores externos claves, como los Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) les quitaban el apoyo. Ahora bien, otra de las principales razones era que las dictaduras habían perdido la credibilidad, la legitimidad y el mínimo apoyo para imponer los programas de reformas económicas, mejor conocidos como “ajustes estructurales”, demandados por estas influyentes fuerzas. Dichos programas, promovidos como necesarios para alcanzar la eficiencia económica, fueron diseñados para abrir estas economías al capital extranjero y al comercio internacional y para permitir a estos países pagar sus enormes deudas externas.

Por ejemplo, en Brasil y Argentina, a comienzos de los ochenta, las ajustadas políticas monetarias y fiscales encontraron oposición no sólo por parte de los trabajadores y otros grupos de la sociedad civil, sino también de los grupos empresarios. Los intereses empresariales habían sido beneficiados por las políticas laborales represivas impuestas por las dictaduras militares. No obstante, los círculos de negocios comenzaron a tomar distancia de los gobiernos represivos cuando las

políticas neoliberales fallaron en cumplir la promesa del crecimiento económico. Como observan Stephen Haggard y Robert Kaufmann:

Con la emergencia de problemas económicos, las élites empresariales comenzaron a reevaluar los costos y beneficios del estilo de toma de decisión tecnocrática que caracterizaba a los gobiernos autoritarios. Los grupos de negocios se habían quejado periódicamente sobre su falta de acceso a desconocidos tecnócratas que conducían la política macroeconómica, pero tales preocupaciones habían sido contrabalanceadas por los beneficios particulares y por el hecho de que los gobernantes deseaban reprimir los desafíos de los sectores populares. La gradual desafección del sector privado no reflejó una epifanía democrática, pero sí una respuesta pragmática a las circunstancias cambiantes. Con gobiernos autoritarios cada vez más incapaces de cumplir con su parte del acuerdo, la “voz” comenzó a parecer cada vez más importante para los grupos empresariales, incluso cuando esto significaba reabrir el juego a los previamente excluidos sectores populares (Haggard y Kaufman, 1995: 59-60).

Los gobiernos democráticos que desplazaron a los regímenes autoritarios prontamente se encontraron con su propio dilema. Por un lado, las políticas re-distributivas estaban bloqueadas por las élites que se habían sumado a la coalición anti-dictadura, un desarrollo que ya hemos discutido. Al mismo tiempo, las políticas fiscales expansivas eran desalentadas por el Banco Mundial y el FMI. Rápidamente se hizo claro que lo que las agencias multilaterales deseaban que ellos hicieran era utilizar sus legitimidades democráticas para imponer programas de ajuste estructural. En Argentina, por ejemplo, las instituciones financieras internacionales presionaron al gobierno de Raúl Alfonsín para que abandonara las políticas neo-keynesianas, implementara reformas impositivas, liberalizara el comercio y privatizara las empresas públicas. Cuando el gobierno se mostró dubitativo, el Banco Mundial “concluyó que el gobierno no había realizado los progresos suficientes para llegar a las metas reformistas y suspendió los desembolsos de un préstamo de ajuste estructural” (Haggard y Kaufman, 1995: 192).

La democracia electoral se convirtió en el mecanismo predilecto para la imposición de programas de estabilización o ajuste estructural en Jamaica, Haití, Filipinas, Perú y Pakistán. En Jamaica, el gobierno progresista de Manley sufrió una devastadora pérdida de la legitimidad cuando comenzó a presionar para imponer un programa de estabilización del FMI bendecido por Washington. El programa deterioró los niveles de vida y llevó a Manley a un aplastante fracaso en las elecciones de 1980 a manos de un sucesor que procedió a continuar con las mismas políticas con el beneplácito del FMI. En

Perú, el gobierno de Alberto Fujimori fue electo sobre la base de una plataforma populista, anti-FMI, pero no obstante procedió a imponer un “shock” de medidas neoliberales que incluían tanto incrementos escalonados de los precios en las tasas cobradas por las empresas estatales como una radical liberalización del comercio. Estas medidas provocaron una profunda recesión, que causó el descontento popular, al cual Fujimori respondió suspendiendo la Constitución, cerrando el Congreso y gobernando como un hombre fuerte con poco respeto por las restricciones constitucionales (Huber y Stephens, 1997: 8).

En Filipinas, Estados Unidos y las agencias multilaterales abandonaron a Marcos. No sólo su posición política fue insostenible debido a la masiva resistencia popular, sino que la pérdida de legitimidad de su gobierno hizo que este se convirtiera en un instrumento ineffectivo para devolver los \$28 billones de deuda externa y para implementar las políticas de estabilización del FMI. El fin del viejo régimen fue acompañado por una crisis económica, pero esto no detuvo las demandas del Banco Mundial y del FMI para que la prioridad económica nacional, del inexperto gobierno democrático de la presidenta Corazón Aquino, fuera el pago de la deuda. La gente quedó shockeada y algunos de los asesores económicos de Aquino protestaron, pero el gobierno accedió, firmando un decreto que afirmaba la “apropiación automática” del monto total necesario para cumplir con los servicios de la deuda externa del presupuesto del gobierno nacional. Esta medida prácticamente excluyó el desarrollo nacional, ya que se destinaba aproximadamente entre el 40 y el 50% del presupuesto al servicio de la deuda y lo que restaba era utilizado para el pago de salarios y gastos de funcionamiento, con muy poco resto para gastos de capital. Por algunos años, el 10% del PBI del país fue destinado al pago de los servicios de la deuda externa. De este modo no es sorprendente que Filipinas registrara un crecimiento promedio por debajo del 1.5% anual entre 1983 y 1993.

Resulta irónico que hoy en día la ex presidenta Aquino marche en contra de la presidenta Arroyo cuando ella misma fue responsable de muchas políticas económicas, destacándose la política del modelo deudor, la cual Arroyo heredó. Como en Perú, Argentina y las Filipinas, el retorno a la democracia de Brasil fue acompañado por advertencias apenas disimuladas por parte del FMI y los Estados Unidos de que la primera consigna en materia de negocios del nuevo régimen era cumplir con lo que el saliente régimen militar no había podido alcanzar, esto es, imponer programas de estabilización, aumentar las tasas de interés, reducir los gastos gubernamentales, devaluar la moneda y liberalizar el comercio. Desde mediados de los ochenta hasta el 2002, una serie de gobiernos erosionó la credibilidad de la democracia a través de la realización de esfuerzos vanos para imponer en una pobla-

ción reacia la estabilización económica deseada por Washington y el FMI¹. La última víctima es el gobierno de “Lula” o Luiz Inácio da Silva del Partido de los Trabajadores de Brasil, uno de los partidos más comprometidos con el anti-neoliberalismo en el continente. Incluso antes de que ganara las elecciones presidenciales, en la carrera de 2002, Lula hizo algo sin precedentes en América Latina: prometió al FMI que honraría los altos intereses y las condiciones presupuestarias restrictivas de un préstamo de estabilización negociado con el saliente presidente Fernando Henrique Cardoso. Lula actuó bajo coerción. El Fondo aclaró que no liberaría los restantes \$24 billones del préstamo de estabilización a menos que él se comportara debidamente.

Lula fue leal a sus palabras. En consecuencia, el PBI brasileño en el año 2003, el primer año de gobierno de Lula, se contrajo un 0,2% y el desempleo llegó a un récord del 13%. Esta amarga medicina para el pueblo brasileño fue, de todas maneras, un tónico para los inversores externos. En los primeros ocho meses del año, incluso a pesar de que la economía permanecía depresiva, las reservas se elevaron por encima del 58%, lo cual hizo que *Business Week* aconsejara a los inversores especulativos: “no abandonen esta fiesta todavía” (*Business Week*, 2003: 31). En cuanto a Lula, debió enfrentar crecientes críticas provenientes de su propio Partido de los Trabajadores y la coalición gobernante así como también de los votantes comunes; sólo el 28% de la población admitió apoyar a su gobierno (Smith, 2004). En otras palabras, incluso antes de que la crisis por denuncias de corrupción entre los asesores más cercanos a Lula estallara, el gobierno ya estaba en problemas debido a la adopción de políticas contractivas.

La otra cara de la tercera ola de democratización aparece como una amenaza a lo largo de América Latina, donde una encuesta realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2004 demostró que el 54,7% de los encuestados latinoamericanos expresó que apoyaría a régimen autoritarios en detrimento de los democráticos si éstos pudieran resolver los problemas económicos (Diamond, 2001: 358).

En el Sur de Asia, el reverso de la tercera ola es ya una realidad. Cuando el Gral. Pervez Musharraf tomó el poder en Pakistán en octubre de 1999 y mandó a su casa al primer ministro Nawaz Sharaf, terminó con 11 años de democracia inestable. La ruptura democrática en Pakistán ha sido tan preocupante para muchos estudiantes ortodoxos de la democracia que el analista Larry Diamond escribió: “Pakistán podría no ser el último país de alto perfil que sufre la ruptura de

1 Ver, entre otros, Rocha Geisa, 2002: 5-33; también Haggard y Kaufman, 1995: 193-196, 209-211.

su democracia. Lo cierto es que estamos en presencia de una “tercera contra-ola”, cuyo origen puede muy bien establecerse el 12 de octubre de 1999” (Kemal, 2001).

Los análisis post-mortem de la democracia parlamentaria pakistaní tienden a enfocarse en la corrupción, el colapso del gobierno de la ley, la polarización étnica y religiosa y las crisis económicas. Otras explicaciones se centran en la falta de control sobre el ejército, que ha disfrutado de relaciones especiales con el Pentágono debido al rol clave que desempeñó en la expulsión de los rusos de Afganistán. Ciertamente todos estos fueron factores cruciales, pero también lo fue el papel jugado por el FMI y el Banco Mundial, que presionaron a los regímenes democráticos de Benazir Bhutto y Nawaz Sharif para que impusieran programas de estabilización y ajuste estructural que contribuyeron significativamente al incremento de la pobreza y la desigualdad así como también al descenso de la tasa de crecimiento. Según destaca un eminente economista paquistaní:

[...] la preocupación casi obsesiva por la estabilización macroeconómica en el corto plazo colleva el peligro [...] de que algunos de nuestros programas sociales básicos puedan verse afectados, y eso tendría consecuencias intergeneracionales para el desarrollo de Pakistán (Shore, 1999).

En la medida en que se asoció la democracia con el aumento de los niveles de pobreza y el estancamiento económico, no es sorprendente que el golpe de Estado fuera visto con alivio por muchos paquistaníes, tanto entre los sectores medios como en las masas trabajadoras.

EL DESAFÍO

En un ensayo reciente, el filósofo Richard Rorty dibujó un cuadro desolador sobre el rumbo de la democracia occidental:

Al final de este proceso de erosión, la democracia debería haber sido reemplazada por algo bastante diferente. Probablemente no sería una dictadura militar ni un totalitarismo orwelliano, sino un despotismo relativamente benévolos, impuesto por lo que gradualmente se convertiría en una nomenclatura hereditaria.

Una estructura de poder de tales características sobrevivió a la caída de la Unión Soviética y actualmente se está consolidando con Putin y sus alumnos de la KGB. La misma estructura parece estar tomando forma en China y el Sudeste Asiático. En países que toman este rumbo, la opinión pública no interesa demasiado. Las elecciones pueden mantenerse, pero a los partidos de oposición no se les está permitido representar serias amenazas a los poderes constituidos. Las carreras están menos abiertas al talento y son más dependientes de las conexiones

con personas poderosas. Desde que las cortes y los comités que controlan a la policía son relativamente menos poderosos, los comerciantes deben pagar a la policía, o a criminales tolerados por la policía, para tener protección y mantener sus negocios. Es difícil para los ciudadanos quejarse sobre la corrupción y el abuso de poder por parte de los agentes públicos. La cultura de alto nivel está restringida a áreas irrelevantes para la política (...) Los medios ya no están libres de censura. Ya no hay demostraciones estudiantiles. En poco tiempo se dará el retorno al *Ancien Régime*, con los sectores a cargo de la seguridad nacional de cada país jugando el rol de la corte en Versalles (Rorty, 2004).

Es posible que esta oscura visión no pueda ser aplicada todavía a las democracias occidentales, aunque algunos de mis amigos afirman que es un perfecto retrato de Washington bajo el régimen de Bush. Sin embargo, es un punto de llegada creíble si las fuerzas que están eviscerando a la democracia no son controladas. Ésta no es una visión con la que no estemos familiarizados. En el siglo XX, Max Weber se refirió a la “jaula de hierro” de la burocratización y Robert Michels llamó la atención sobre la “ley de hierro de la oligarquía”. Hoy la “jaula de hierro” está siendo forjada por numerosas fuerzas: la centralización burocrática que está fuera de control, el grupo administrador de la seguridad nacional que está jugando con los miedos del terrorismo, la concentración y control en manos corporativas de la producción y los mercados. En el caso del Tercer Mundo, para tener una imagen comprensiva de las amenazas que están asfixiando globalmente a la democracia, se deben añadir a la fórmula las políticas draconianas de las poderosas instituciones multilaterales y la subversión sistemática de los mecanismos democráticos que realizan las élites locales.

Para responder a estas amenazas necesitaremos en primer lugar una reconceptualización o revisión fundamental de la democracia en varios niveles. Por mucho tiempo hemos identificado a la democracia con elecciones, por lo cual una vez que hemos acudido a las urnas y elegido al partido y a los representantes de nuestra preferencia, consideramos que hemos cumplido con nuestras responsabilidades democráticas. Hoy más que nunca es relevante la advertencia de Rousseau sobre la corrupción de los sistemas representativos, que hace que éstos encarnen el deseo corporativo de los representantes por sobre la voluntad popular. Hoy más que nunca es verdad la advertencia de Michels en cuanto a que las elecciones pueden pasar a ser menos una cuestión del pueblo eligiendo libremente a sus representantes y más que nada una herramienta de los representantes para mantenerse a sí mismos en sus cargos. Uno de los desafíos clave que enfrentamos es avanzar en propuestas audaces para innovar en métodos más directos y participativos para el gobierno democrático y en este punto el mo-

vimiento anti-globalización con su énfasis en los métodos directos de toma de decisión puede ser de gran ayuda. No podemos seguir pretendiendo que una democracia en funcionamiento puede ser substancial cuando existe la igualdad formal de sus ciudadanos pero hay grandes y reales desigualdades de riqueza entre los mismos. Hemos visto en todo momento, tanto en los Estados Unidos como en el mundo en desarrollo, la perversión sistemática de la democracia por parte del dinero y la riqueza. Las reformas en las leyes de financiamiento de las campañas es sólo un primer paso para revertir esta tendencia. Desde mi punto de vista, el fortalecimiento de la democracia es inseparable de una mayor distribución equitativa de las ganancias y los ingresos, lo cual significa revertir la acción espontánea del mercado tendiente a crear y perpetuar las desigualdades. El desprendimiento del mercado de la sociedad, para tomar prestada la imagen del gran académico húngaro Karl Polanyi, en nombre de la eficiencia y la prosperidad, ha sido el mayor creador de desigualdad y lo que más ha subvertido la legitimidad democrática en el último cuarto del siglo. Hemos re-aprendido de un modo duro lo que nos habían enseñado los teóricos clásicos de la democracia: que no podemos separar la igualdad de la democracia. Hemos aprendido en un difícil camino que, contrariamente al clásico dictado de Milton Friedman, la libertad de los mercados se traduce en mayor libertad para las corporaciones y en menor libertad para los ciudadanos. Debemos comprender que el modus vivendi entre la democracia y el capitalismo llamado democracia lockeana ha sido disfuncional por mucho tiempo, y que para sobrevivir la democracia contemporánea debe romper con el rígido caparazón lockeano que la está aprisionando.

Sobre todo debemos enfrentar el hecho de que el capitalismo y la profundización de la democracia ya no son compatibles, y que el desafío reside en la naturaleza y el nivel de restricciones que ponemos al mercado mientras reestructuramos el sistema de producción y consumo en torno a la satisfacción de las necesidades de la gente y de la comunidad antes que alrededor de la rentabilidad. Denominar economías participativas, socialdemocracia, economía popular, o socialismo implica en esencia que el mercado debe ser drásticamente reensamblado a la sociedad, sujeto a los valores humanos primordiales de la comunidad, tales como la justicia, la igualdad y la solidaridad.

Finalmente existe el desafío de comenzar a controlar la gran burocracia que se ve a sí misma como por encima de la política democrática. Por una parte se encuentran las élites corporativas que sostienen que alcanzar la eficiencia en la producción y en la distribución sólo puede ser posible a través del control jerárquico –que la democracia debe ejercer estrictamente sobre la representación política pero de-

teniéndose en el campo de la producción-. Por otra parte, las élites tecnocráticas señalan que la administración del estado moderno y la economía es demasiado compleja para los ciudadanos importantes y debe ser dejada a los expertos. Por último, las élites de la seguridad nacional, que afirman que las exigencias para proveer seguridad nacional y llevar adelante las guerras actuales implican una precisa coordinación de las decisiones, necesitan limitar las libertades clásicas propias de una época anterior y aislar a los encargados de la seguridad nacional de lo que ellos ven con desdén como "cambios bruscos" de la política democrática civil. Lo que resulta insidioso del comportamiento de estas élites es que aunque mantienen que una centralización tecnocrática es imperativa para las sociedades modernas y que las prácticas democráticas deben ajustarse a este hecho de la realidad, oportunamente usan el eslogan de limitar y reducir el gobierno para esconder su agenda tecnocrática. Obviamente estoy hablando de los sectores más influyentes del Partido Republicano de Estados Unidos, el cual ingeniosamente usa al Christian Right y al Instituto Cato como pequeños modelos de gobiernos a seguir para avanzar en su programa de centralización conservadora.

Permítanme finalizar diciendo que la democracia enfrenta una crisis global y no podemos acercarnos al problema como si fuera un simple dilema de pensamiento que debe ser sondeado y descifrado. Nos estamos enfrentando con las clásicas cuestiones de la teoría democrática, las preguntas fundamentales, para las cuales debemos construir ideas y soluciones institucionales apropiadas a los tiempos que corren. Debemos alcanzar y enfrentar con coraje todas las dimensiones de las amenazas que se posan sobre la democracia. Para ello, será nuestra habilidad para enfrentarlas la que nos proveerá de las respuestas a la pregunta de si la revolución democrática global se profundizará o se convertirá en algo del pasado, dejando a futuros historiadores, como Rorty lo expuso, el rompecabezas de descifrar por qué la era dorada de la democracia, como la era de los Antoninos, solamente duró cerca de cien años.

BIBLIOGRAFÍA

- Bello, Walden 2003 "Parallel crises: Dysfunctional Democracy in Washington and Manila" en Villareal, Corazón (ed.) *Back to the Future* (Manila: American Studies Association of the Philippines).
- Burbach, Roger 2004 *Brazilian fiscal conservatives in Lula's government under attack along with International Monetary Fund* (Berkeley: Center for the Study of the Americas [CENSA]), 22 de marzo.
- Business Week 2003 "Don't leave this party yet", 8 de setiembre.

LA GLOBALIZACIÓN Y EL CONSENSO DE WASHINGTON

- Business Week 2004 "Is Lula's honeymoon winding down?", 26 de abril.
- Diamond, Larry 2001 "Is Pakistan the (reverse) wave of the future?" en Diamond, Larry y Plattner, Marc *The Global Divergence of Democracies* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).
- Haggard, Stephen y Kaufman, Robert 1995 *The political economy of democratic transitions* (Princeton: Princeton University Press).
- Huber, Evelyn y Stephens, John 1997 "The bourgeoisie and democracy: Historical and contemporary perspectives from Europe and Latin America", *Paper* entregado en la reunión de la Latin American Studies Association, Continental Plaza Hotel, Guadalajara, México, 17-19 de abril.
- Kemal, A. R. "Structural adjustment, macroeconomic policies, and poverty trends in Pakistan", *Paper* entregado en el *Asia and Pacific forum on Poverty: Reforming Policies and Institutions for Poverty Reduction*, Asian Development Bank, Manila, 5-9 de febrero.
- Pfaff, William 2001 "The Pentagon, not Congress or the President, calls the shots" en *International Herald Tribune*, 6 de agosto.
- Rocha Geisa, María 2002 "Neo-Dependency in Brazil" en *New Left Review*, N° 16 (Second Series), julio-agosto.
- Rorty, Richard 2004 "Post Democracy" en *London Review of Books*, Vol. 26, N° 7, 1 de abril.
- Scarry, Elaine "Resolving to Resist" en *Boston Review*, Vol. 29, N° 1, febrero-marzo.
- Shore, Keane 1999 "The impact of structural adjustment programs on Pakistan's social development" en *IDRC Reports*, 7 de junio.
- Smith, Geri 2004 "Democracy on the Ropes" en *Business Week*, 19 de mayo.